Códigos de procedimientos y de fórmulas judiciales.—Reproducción hecha por el Ministerio de Justicia. San Salvador, “Imprenta Nacional”, 1960, 8-376-4 pp.

Con motivo de haberse cumplido el 20 de noviembre de 1957 el centenario de los **Códigos de procedimientos civiles y criminales y de fórmulas de todas las instancias y actos de cartulación de la República del Salvador en Centro-América**, que tal es el título completo de su primera edición (cfr. p. 39), salida en 1858 de

---

9 Cabe, sin embargo, una extradición interna, y el caso se da, precisamente, en México, dada su organización federal y su doble orden jurisdiccional (federal y local), según se comprueba con sólo contraponer la “Ley de extradición de la República Mexicana”, de 1897, es decir, la de carácter internacional en defecto de tratados (cfr. su art. 1), y la “Ley reglamentaria del artículo 119 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos”, de 1953, o sea la de índole interna, entre autoridades de diferentes entidades federativas para la recíproca entrega de “reos condenados por sentencia ejecutoria, procesados que traten de evadir la acción de la justicia o presuntos responsables contra quienes se haya dictado orden de aprehensión” (art. 1º, que, por cierto, se vale, junto a “exhorto”, del término “requisitoria”, el mismo utilizado por Covarrubias: véase *ob. com.*, p. 507).

10 Ya Dorado Montero, por contraernos al ámbito del derecho penal, puso de relieve cómo “afirmaciones relativas a la prevención de los delitos” se encuentran en autores españoles anteriores algunos en dos siglos a Montesquieu, Beccaria y Bentham: véase su artículo *ideas de algunos antiguos escritores españoles sobre la prevención de los delitos* (en “Estudios de derecho penal preventivo —Madrid, 1901—, pp. 241-70, y luego en la segunda edición, titulada “El derecho protector de los criminales”, vol. 1 —Madrid, 1915—, pp. 487-512). Y a causa, sin duda, de su gravitación sobre el propio Dorado y luego sobre Asúa y Ruiz-Funes, España es el primer país del mundo que promulga, en 1933, una ley sobre peligrosidad sin delito, modelo para las de varios Estados sudamericanos: véase Alcalá-Zamora, *El sistema procesal de la ley relativa a vagos y maleantes* (publicada su primera parte en la “Rivista italiana di diritto penale”, 1937, núm. 5, pp. 526-42, y después íntegro en nuestros citados “Ensayos”, pp. 175-234), así como Ruiz-Funes, *La peligrosidad y sus experiencias legales* (La Habana, 1948).

la "Imprenta de Luna, Calle de la Providencia N° 2", de la ciudad de Guatemala, el Gobierno salvadoreño dispuso la reedición del cuerpo legal compuesto por el presbítero y doctor Isidro Menéndez y revisado por una comisión integrada por él mismo y por el licenciado Ignacio Gómez, ya que su tercer miembro, don Eustaquio Cuéllar, se separó de ella antes de que aquélla rindiese su informe. Al reeditarla, se "ha tratado, en lo posible, de conservar el formato y aun el tipo de letra empleado en la primera edición" (p. 2 de las "Palabras liminares"), pero sin haberse decidido por una reproducción fotográfica, única que habría suministrado una copia exacta.

No vamos, claro está, a un siglo largo de distancia a **descubrir un texto** al que se dedican en las primeras páginas elogios absolutamente inmerecidos, ya que el código del presbítero Menéndez, carente de originalidad en cuanto a contenido (como inspirado en la tradición procesal española a través del código boliviano de 1832,¹ cuya influencia se percibe muy clara), resulta defectuosísimo en la sistemática que adopta y de una longitud excesiva. Limitémonos por ello a describirlo muy someramente, en sus divisiones capitales, y a destacar dos de sus rasgos más salientes. Compónese el código de la friolera de 1957 artículos, euando con un millar a lo sumo habría bastado.² Ello obedece a la exorbitante cifra de procedimientos especiales que contiene y al detallismo y casuismo con que numerosas instituciones se regulan. Se distribuye en tres partes: la primera se ocupa "De los procedimientos civiles en primera instancia" (arts. 1-996); la segunda, "De los procedimientos criminales en primera instancia" (arts. 997-1545), y la tercera, "De los procedimientos civiles y criminales en segunda y tercera instancia y recursos extraordinarios" (arts. 1546-1957).

Como primero de sus caracteres salientes señalaremos su índole unitaria, puesto que trata tanto del enjuiciamiento civil como del criminal, si bien en forma sobremañera defectuosa y desordenada, ya que su parte primera debería haberse reservado para las disposiciones comunes a ambos procesos y destinar luego las otras dos a las normas peculiares de cada uno de ellos. Pertenece, pues, la ley salvadoreña de 1857 a la reducida familia de códigos procesales unitarios, como

1 Conocido como *Código de Procederes Santa Cruz*, en consideración al apellido del Presidente en cuya época se promulgó: cfr. M. Rigoberto Paredes, *Historia del derecho procesal boliviano*, en "Revista de Derecho Procesal" Argentina, 1944, I (pp. 366-379), pp. 370-1. El código Santa Cruz se inspiró a su vez, en gran parte, en el *Prontuario de los juicios, su orden, substanciación e incidencias*, escrito en 1782 por el Dr. Francisco (no José, como con frecuencia se le llama) Gutiérrez de Escobar, y usualmente designado como "Cuadernillo de Gutiérrez": para su estudio, cfr. Paredes, *ob. cit.*, pp. 368-9; Vázquez Machicado, *El "Cuadernillo de Gutiérrez"*, sobretiro de "Inter-American Review of Bibliography", vol. II, enero-agosto de 1952, pp. 20-29, y Reimundín, *Antecedentes históricos del derecho procesal indiano* (Tucumán, Argentina, 1953), volumen consagrado por entero al estudio de la vida y de la obra del ilustre jurista peruano.

2 Acaso se diga que la ley de enjuiciamiento civil española, posterior en el tiempo, como de 1881, cuenta con 2182 artículos y no regula el proceso penal; pero no se trata aquí de argumentar a base del *más eres tú, sino*, en este caso, del *menos soy yo*; y ante tantos códigos procesales como hay en el mundo que no alcanzan el millar de disposiciones, el salvadoreño, aun restándole las concernientes a la justicia criminal, resulta excesivo.

aquí en América el hondureño de 1906 y el panameño de 1916,³ o cual en Europa los muchísimo más progresivos de Dinamarca de 1916⁴ o de Suecia de 1942.⁵

El otro rasgo acusadísimo consiste en la orgía de definiciones que, a imitación del boliviano, ⁶ salpica el texto, con olvido de que semejante tarea es tan propia de la doctrina como impropia del legislador. Sin la pretensión de que la lista que sigue sea completa, he aquí algunos de los conceptos definidos en el código salvadoreño, por el mismo orden, o desorden, con que aparecen en el articulado: juicio (art. 1), juicio civil (2), actor y reo (11), jurisdicción (23), juicios por arbitramento (47), acción (133), clases de acción (134), excepciones (136), conciliación (164), demanda (203), citación (214), emplazamiento (215), notificación (216), contestación a la demanda (239), prueba (251), testigo (323), tacha (366), confesión judicial (412), presunciones (436), sentencia (451), sentencia interlocutoria y sentencia definitiva (452), tercer opositor (504), desistimiento (513), deserción (516), causa ordinaria de mero derecho (580), juicio de deslinde (606), juicio ejecutivo (643), embargo (665), concurso de acreedores (709), espera (733), remisión o quita (746), juicio sumario de posesión (756), emancipación (805), bienes mostrencos (939), bienes vacantes (940), juicio criminal (997), clases de juicio criminal (998-1000), acusador, denunciante y quejoso (1026), arrestar (1056), prisión (1057), fianza de la haz (1083),⁷ fianza de calumnia (1101),⁸ cuerpo del delito (1139), apelación (1546), súplica (1651), recusa-

3 Este último no es sino el *Código Judicial* colombiano de 1872; pero mientras en Panamá continúa rigiendo la organización judicial, el proceso civil y el penal (cfr. Torres Gudiño, *Panorama del derecho procesal civil panameño*, primero en "Revista de la Facultad de Derecho de México", 1954, núm. 13, pp. 79-130, y luego en folleto —Panamá, 1955—, núm. 2), en Colombia se sancionó en 1931 un código judicial comprensivo tan sólo de la organización judicial y el procedimiento civil y en 1938 el código de procedimiento penal (cfr. Martínez Sarmiento, *Historia del derecho procesal colombiano*", en "Revista de Derecho Procesal" argentina, 1943, 1, pp. 439-69, *passim*).

4 Vigente desde 1919; cfr. Munch-Petersen, *Der Zivilprozess Dänemarks* (Mannheim/Berlin/Leipzig, 1932), pp. 3-4.

5 Vigente a partir de 1948: véase nuestra reseña del mismo, en este "Boletín", 1953, núm. 18, pp. 213-21. Más datos sobre leyes procesales unitarias, en la nota 42 de nuestros *Principios técnicos y políticos de una reforma procesal* (Tegucigalpa, 1950; ensayo reimpresso en la "Revista de la Universidad" de Honduras, 1960, núm. 1).

6 Donde, sin duda por el influjo sobre él ejercido por el *Cuadernillo de Gutiérrez* (*supra*, nota 1), las definiciones abundan. También las encontramos en el código judicial colombiano, que a su vez las tomó del de Cundinamarca de 1838 (cfr. Martínez Sarmiento, *ob. cit.*, en la nota 3, pp. 454-5 y 460).

7 A saber: "el prometimiento solemne que una persona capaz de obligarse, hace de la seguridad del reo, sujetándose a presentarlo en juicio siempre que se lo mande la autoridad competente" (art. cit.). Se corresponde con la fianza personal para garantizar la libertad provisional del inculcado (cfr., por ejemplo, arts. 562, frac. III, y 569, cód. proc. pen. del Distrito Federal).

8 "Fianza de calumnia es la seguridad fideiussoria que da el acusador de seguir y fenecer la acusación". Dicha fianza entronca con el juramento de calumnia, o mancuadra, del derecho medieval hispanogermánico: cfr. García de Diego, *Historia de Aragón en los siglos VIII al XII* (en "Anuario de Historia de Derecho Español", tomo XI, Madrid, 1934, pp. 77-210), p. 151; Alcalá-Zamora, *Instituciones judiciales y procesales del Fuero de Cuenca* (en "Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia", 1950, núm. 47-48, p. 281-373), núm. 57.

ción (1763), competencia (en el sentido de cuestión de: 1806), recurso de fuerza (1817), responsabilidad (reato de: 1852).

Agreguemos que el articulado va precedido de una amplia exposición de motivos, bajo el epígrafe de "Informe con que la Comisión autorizada para la revisión y reforma del proyecto de código de procedimientos judiciales del Salvador, acompañó sus trabajos" (pp. 1-38).

En cuanto al **Código de fórmulas, o sea formulario de todas las actuaciones civiles y actos de cartulación**, según se lee en la portadilla de la página 167, se divide asimismo en tres partes, pero sin que se correspondan con las del código de procedimientos. En efecto, la primera se refiere a las "actuaciones civiles" en todas las instancias, inclusive los recursos extraordinarios (pp. 169-265); la segunda, a las "actuaciones criminales", también en todas sus fases y grados (pp. 269-312), y la tercera, a las "cartulaciones" (pp. 315-363), es decir, al ámbito de la que en los planes de enseñanza españoles se llamó durante muchos años "redacción de instrumentos públicos",⁹ disciplina perteneciente a los dominios del derecho notarial y no del procesal. Dicho código, que de tal no tiene más que el nombre y que hace surgir la duda de si los escritos no acomodados a él serán por esa sola causa inadmisibles, se reduce, como indica su subtítulo, a una colección de fórmulas —sencillas, en general—, acompañadas de las explicaciones y complementos necesarios para su mejor inteligencia.